**Solicitud de insumos sobre los derechos de las personas con discapacidad y los sistemas de apoyo para garantizar su inclusión**

# 1(a). ¿Cuenta su país con leyes, políticas, planes, estrategias o programas en cualquier nivel de gobierno relacionados con el apoyo individualizado a las personas con discapacidad? En particular, iniciativas relacionadas con:

1. **La comunicación: Apoyo para superar las barreras que limitan la capacidad de comunicación y de hacerse entender (por ejemplo, interpretación de lenguas de señas, interpretación táctil, tecnología de apoyo y programas informáticos de asistencia, formatos de lectura fácil y lenguaje sencillo, subtitulado, comunicación aumentativa y alternativa, entre otros).**

En el artículo 14 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) se establece que la Lengua de Señas Mexicana es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. Asimismo, se establece que serán reconocidos el Sistema Braille así como los modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad.

Se cuenta con los Lineamientos Generales sobre Accesibilidad en el Servicio de Televisión Radiodifundida, que tienen por objeto establecer los parámetros que deberán cumplir los servicios de Accesibilidad para personas con Discapacidad en el Servicio de Televisión Radiodifundida.

Asimismo, las siguientes Entidades Federativas abordan en sus Planes Estatales de Desarrollo el tema de comunicación:

* Baja California. - Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024
* Campeche. - Plan Estatal de Desarrollo 2021- 2027
* Guerrero. - Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
* Quintana Roo. - Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
* Tabasco. - Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2024
* Yucatán. - Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2022

Por su parte, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) cuenta con un [estándar de competencia de interpretación](https://conocer.gob.mx/contenido/publicaciones_dof/2020/EC1319.pdf) de Lengua de Señas Mexicana (LSM). De igual manera, el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con una Academia de Lengua de Señas Mexicana que imparte cursos sobre esta lengua en distintos grados de especialización.

Por otra parte,la LGIPD establece en su artículo 12 que la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación. Para tales efectos, entre otras acciones, proporcionará a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad; incluirá la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la LSM en la educación pública y privada, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad; diseñará e implementará programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la Lengua de Señas Mexicana.

Por su parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones establece en su artículo 199 que el Ejecutivo Federal y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán que los usuarios con discapacidad tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones en igualdad de condiciones con los demás usuarios. Además, los portales de Internet de las dependencias de la Administración Pública Federal, así como de organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, del Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, de los órganos constitucionales autónomos; así como de las dependencias de la Administración Pública, de los poderes legislativo y judicial de las entidades federativas y del Distrito Federal deberán contar con funciones de accesibilidad para personas con discapacidad. En el caso de la Administración Pública Federal, los portales deberán atender a las disposiciones establecidas en el marco de la Estrategia Digital Nacional conforme a las mejores prácticas internacionales, así como a las actualizaciones tecnológicas. El Ejecutivo promoverá la implementación de dichas funciones de accesibilidad en los sectores privado y social.

En cuanto a iniciativas de ley sobre estos tópicos y otras actividades del Poder Legislativo se resalta lo siguiente:

* El 8 de septiembre de 2020 la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó el exhorto al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que, en el ámbito de sus competencias y de manera coordinada, promuevan el acceso universal de las personas con discapacidad auditiva a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido Internet; promueva el derecho de las audiencias con discapacidad auditiva a contar con servicios de subtitulaje, doblaje al español y LSM, asimismo, supervise que los usuarios con discapacidad visual tengan acceso a los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, en igualdad de condiciones con los demás usuarios, en el tiempo que dispone el Estado y en los contenidos transmitido por los concesionarios .
* El 15 de septiembre de 2020 durante la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, se presentó la iniciativa consistente en el exhorto al gobierno de México y a los 32 gobiernos de las entidades federativas para el fomento del uso de mascarillas transparentes y caretas para informar y comunicar de manera eficaz a las personas con discapacidad auditiva.
* El 8 de abril de 2021 la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó el exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e Infraestructura, al Poder Judicial de la Federación, al Congreso de la Unión y a los Congresos de las entidades federativas, para que, con base en sus atribuciones, impulsen las acciones necesarias a fin garantizar el acceso de las personas con discapacidad visual a los contenidos transmitidos por las diferentes modalidades de comunicación, así como a los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
* El 10 de agosto de 2020, durante la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados federal, se presentó la iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPC) con la finalidad de implementar los formatos de lectura fácil en los procesos y procedimientos en los que las personas con discapacidad intelectual, visual y auditiva sean parte. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados (origen) el 02/03/2021 y turnada a la Cámara de Senadores (revisora), actualmente se encuentra pendiente de revisión. La propuesta consiste en:
  + Adicionar una fracción al Artículo 2° de la LGIPC para definir el concepto de “formato de fácil lectura” como: “texto complementario al principal, redactado en un lenguaje simple, directo, cotidiano y personalizado, el cual puede utilizar ejemplos para su mejor comprensión y está libre de tecnicismos y conceptos abstractos.”
  + Adicionar el artículo 31 Bis. “Las instituciones de impartición de justicia y las autoridades administrativas deberán implementar formatos de lectura fácil en los procesos y procedimientos en los que las personas con discapacidad intelectual, visual y auditiva sean parte.”

Por otra parte, se destacan las siguientes acciones de las distintas entidades federativas que conforman la República mexicana, con respecto a la entrega de auxiliares auditivos, terapias y accesibilidad en páginas web:

* En el estado de Morelos el gobierno se coordina con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF del estado, entrega auxiliares auditivos de asistencia personal para favorecer la movilidad de las personas con discapacidad que faciliten su inclusión social y mejoren su calidad de vida.
* En el Estado de Sinaloa el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF estatal otorga atención a personas de todas las edades con discapacidad auditiva en situación vulnerable; y les provee los auxiliares auditivos que requieren. Asimismo, en sus Centros de rehabilitación se incluyen terapias de audición y lenguaje y apoyo a personas con discapacidad visual para su integración escolar, laboral y personal, con atención a niños y adultos en situación de vulnerabilidad.
* El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD), en su página web, ofrece información sobre medidas de atención y protección contra el COVID-19 para personas con discapacidad, Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, Convocatoria para la Integración del Consejo Consultivo del Instituto e Información general, en formato de documento PDF accesible y versión de lectura fácil y videos con lenguaje de señas.
* El Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS), en su página web, ofrece toda su información con la posibilidad de aumentar el tamaño de la letra para personas con discapacidad visual.
* Por su parte, el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS), en su página web, tiene un menú de accesibilidad para personas con discapacidad que permite elegir el contraste de luz; resaltar los enlaces que contienen la información de consulta; cambiar el tamaño de la letra y el espaciado del texto de acuerdo a la discapacidad visual; formato amigable para dislexia; reproducir animaciones; aumentar el tamaño del cursor; elegir la fuente de la letra; máscara de lectura; elegir la altura de la línea; elegir el alineado del texto y seleccionar la saturación de color.
* El Instituto Estatal de Discapacidad del Estado de Puebla tiene opciones de accesibilidad para personas con discapacidad visual para consultar la información de su página de internet.
* El Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad de Zacatecas tiene un menú de herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad visual.

A nivel federal, en materia de acceso a la información en formatos accesibles, se destaca lo siguiente:

* El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que es la institución pública de salud y seguridad social más grande del país, tiene en su página electrónica un menú de accesibilidad que permite elegir la opción de usar un lector de pantalla, navegar con el teclado, cambiar el contraste de color, cambiar la escala de grises, elemento de detección de movimiento, ampliar la pantalla y añadir una capa de ayuda.
* Asimismo, todas las páginas electrónicas de las dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal tienen la herramienta de accesibilidad que brinda un menú con las opciones descritas en el párrafo anterior, más la posibilidad de elegir una guía de lectura.
* Por otra parte, el sitio oficial de la Cámara de Diputados ofrece una opción de acceso para personas con discapacidad para consultar la información disponible en la página de internet.
* A su vez, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), ofrece en su página de internet opciones de accesibilidad para personas con alguna discapacidad visual y auditiva.

En cuanto a organismos constitucionales autónomos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral ofrecen en su respectiva página de internet la opción de accesibilidad para personas con discapacidad con seis opciones de solución de navegación para discapacidad: visual, motora, lenguaje, discapacidad auditiva, detección sensible y compatibilidad con lector de pantalla.

Respecto a formatos de lectura fácil, se destaca que derivado de la interposición de diversas demandas de amparo por personas con discapacidad intelectual, visual y auditiva para obtener formatos de lectura fácil en los procesos y procedimientos de los que son parte, se obtuvo ya la primera sentencia histórica de amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió en “formato de lectura fácil” a favor de una persona con discapacidad en México, la cual se dictó el 16 de octubre de 2013, en la que se reconoció su derecho a decidir por sí misma.

1. **Toma de decisiones: Apoyo para la toma de decisiones y el ejercicio de la capacidad jurídica. Esto incluye la asistencia para:**

# Obtener y comprender información

# Evaluar las posibles alternativas y consecuencias de una decisión,

# Expresar y comunicar una decisión, y/o

# Poner en práctica una decisión (por ejemplo, acuerdos de apoyo, apoyo entre pares, apoyos autogestores, directiva anticipadas, apoyo en caso de crisis, ayuda para la gestión financiera, entre otros).

El artículo 5, fracción V, de la LGIPD establece que uno de los principios que deberán observar las políticas públicas para las personas con discapacidad es “el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas”.

Igualmente, el sistema de salud se está ajustando a los planes y directrices de desinstitucionalización promovidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con la reforma a la Ley General de Salud en materia de Salud Mental y Adicciones, publicada en el DOF el pasado 16 de mayo de 2022, en el cual se establece que “El consentimiento informado, que constituye el núcleo del derecho a la salud, tanto desde la perspectiva de la libertad individual como de las salvaguardas para el disfrute del mayor estándar de salud. El consentimiento informado es la conformidad expresa de una persona, manifestada por escrito, para la realización de un diagnóstico o tratamiento de salud.”

Asimismo, en el Poder Legislativo existe actualmente una iniciativa que tiene por objeto garantizar la inclusión y participación igualitaria de las personas con discapacidad en asuntos públicos. Para ello propone que las instituciones del sector público de los tres órdenes de gobierno proporcionen modos, medios y formatos de comunicación accesibles que permitan a las personas con discapacidad su participación e integración en los asuntos públicos en igualdad de condiciones que el resto de la población, ello a través de, entre otras, intérpretes de la lengua de señas mexicana, el sistema braille y todos los adecuados a los diferentes tipos de discapacidad. Con esta iniciativa, no solo se busca que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones y se les reconozca su capacidad jurídica, sino que tiene la intención de incluir a las personas con discapacidad en la discusión de los asuntos públicos para que ejerzan sus derechos políticos y sociales.

De igual forma, en las dos Cámaras que integran el Poder Legislativo en México se están llevando a cabo foros de parlamento abierto para alcanzar la armonización normativa recomendada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas en el dictamen que emitió determinando la responsabilidad internacional del Estado Mexicano al incumplir con algunas de sus obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el caso de Arturo Medina Vela. El propósito de dicha armonización normativa es garantizar la igualdad jurídica de las personas con discapacidad e impulsar la modificación del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Civil y de Procedimientos Civiles y la Ley General de Salud. Con ese propósito se está redactando un proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que incluya el respeto y garantía del derecho de las personas con discapacidad a gozar y ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones y atender la deuda de eliminar las barreras en las leyes para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos por cuenta propia.

Por otra parte, la SCJN cuenta con un [Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad](https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/2020-02/protocolo_discapacidad.pdf). Asimismo, en marzo de 2019, la primera sala de la Suprema Corte declaró inconstitucional el estado de interdicción decretado a una persona con discapacidad intelectual (ver [comunicado de prensa](https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5838)).

1. **Movilidad: Apoyo a la movilidad personal y acceso a una asistencia de movilidad asequible, disponible y de calidad (por ejemplo, apoyos a la movilidad, tecnologías y productos de apoyo (prótesis, órtesis, sillas de ruedas) asistencia animal, transporte punto a punto y paratránsito, entre otro).**

El 17 de mayo de este 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Dicha Ley incluye varias disposiciones que tienen como propósito promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. El artículo 1 establece como objeto de dicha ley establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; sentar las bases para la política de movilidad y seguridad vial, bajo un enfoque sistémico y de sistemas seguros, para priorizar el desplazamiento de las personas, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad.

En su artículo 3° prevé las acciones afirmativas para favorecer a personas o grupos en situación de vulnerabilidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan; los ajustes razonables para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; las ayudas técnicas que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad; el diseño universal y las especificaciones técnicas considerando las necesidades diferenciadas de los grupos en situación de vulnerabilidad, los cuales incluyen a la población que enfrenta barreras para ejercer su derecho a la movilidad con seguridad vial como resultado de la desigualdad, como las personas con discapacidad.

También establece en su artículo 6 una jerarquía de la movilidad, que buscar favorecer, en todo momento, a la persona, los grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo a las personas con discapacidad. En su artículo 9 define que el derecho a la movilidad tendrá, entre otras finalidades, la accesibilidad de todas las personas, en igualdad de condiciones, con dignidad y autonomía a las calles y a los sistemas de transporte; priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad.

En su artículo 21 prevé que el sistema de movilidad debe ser igualitario, equitativo e inclusivo, por lo que se debe poner especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad por condición física. De igual manera, prevé que las políticas, programas, campañas y acciones de sensibilización sobre movilidad y seguridad vial deberán considerar la importancia de la incorporación del trato digno y no discriminación hacia grupos en situación de vulnerabilidad.

A nivel subnacional, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece en su artículo 5 lo siguiente:

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona.

Los grupos de atención prioritaria tendrán derecho a la movilidad y a un transporte de calidad, seguro y eficiente; se privilegiará su situación de vulnerabilidad y riesgo, así como la protección de su integridad física y la prevención y erradicación de todo tipo de violencia, discriminación, acoso y exclusión.

Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la ciudad. Para el establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y revalorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:

* 1. Peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con movilidad limitada;
  2. Ciclistas;
  3. Personas usuarias del servicio de transporte público de pasajeros;
  4. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;
  5. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y
  6. Usuarios de transporte particular automotor.

En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su cumplimiento y protección.

Artículo 81.- La Secretaría de Movilidad en coordinación con el resto de la Administración Pública impulsará estrategias, programas, servicios especiales, o cualquier otro mecanismo que permita hacer más eficiente el servicio de transporte público de pasajeros individual y colectivo para las personas con discapacidad y con movilidad limitada cuya implementación gradual resulte en la satisfacción de las necesidades de transporte de este grupo vulnerable.

# En cuanto a accesibilidad para la movilidad, en la Ciudad de México se tiene lo siguiente:

* Entorno físico: Intersecciones seguras. Durante 2019 y 2020 se realizaron adecuaciones geométricas para resguardo peatonal, colocación de nuevos semáforos vehiculares y peatonales en todas las esquinas, trazo de trayectorias para mejorar flujos vehiculares, colocación de señalamiento horizontal y vertical, construcción de reductores de velocidad para mejorar la seguridad vial, para, entre otras, dotar de accesibilidad universal y mejorar criterios para personas con discapacidad motriz, visual y auditiva.
* Transporte: se han integrado nuevas unidades con criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad, tales como rampas, espacios amplios para sillas de ruedas o animales guía. Con recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS 2019) y la participación de personas con discapacidad en la revisión de las modificaciones, se realizaron diversas acciones en el Sistema Metrobús, para homologar criterios de accesibilidad y garantizar el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad: cambio y colocación de pavimento táctil y colocación de señalización tacto-visual con sistema Braille en diversas estaciones.
* El 25 de agosto de 2020 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los Lineamientos para el uso de tarjetas de gratuidad en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), mismos que establecen los términos y condiciones de uso que garanticen la eficiente implementación y el uso correcto de la Tarjeta de Gratuidad en el SITP para personas con discapacidad permanente. En el transporte público se han establecido las características técnicas que deben cumplir el metro y los autobuses del SITP, así como el transporte concesionado, con criterio de accesibilidad para las personas con discapacidad que utilizan silla de ruedas y perros de asistencia.
* El Programa de Apoyo a Personas que Carecen de Recursos Económicos para adquirir un aparato funcional: sillas de ruedas, carriolas, andaderas, sillas especiales para adulto, entre otros; asimismo si lo requieren, reciben orientación y/o canalización a alguno de los Centros o Unidades Básicas de rehabilitación del Sistema DIF Sinaloa.
* También existe un Programa de emplacamiento vehicular de personas con discapacidad favorece el uso de los espacios públicos de acceso preferencial a las personas con discapacidad neuromotora y/o músculo-esquelética, a través de la expedición de una matrícula oficial por parte del Gobierno del estado identificada con el ícono internacional de discapacidad.

1. **Asistencia para las actividades diarias: Apoyo para asistir a las personas con discapacidad en una relación humana de uno a uno para realizar actividades de la vida diaria como levantarse, bañarse, vestirse, asearse, salir, cocinar, limpiar, guiar, hacer las compras o lavar la ropa (por ejemplo, asistencia personal profesional a tiempo completo o parcial subsidio para apoyo de una tercera persona, asistencia personal informal, limpieza del hogar, entre otros).**

Actualmente existen dos propuestas para implementar un sistema de cuidados. La primera propuesta es una iniciativa de ley para crear el sistema nacional de cuidados, y la segunda es un sistema de cuidados en la Ciudad de México. Desde el 2018 se ha suscitado un debate acerca de la Estrategia Nacional de Cuidados (ENAC) en México con la finalidad de sentar las bases para impulsar una ley. La problemática del cuidado radica tanto en la distribución desigual de las tareas de cuidado y del hogar entre hombres y mujeres, el Estado y el mercado, dejando desproporcionadamente las tareas de cuidados y del hogar a las mujeres, limitando su participación en el mercado laboral, reduciendo su tiempo de esparcimiento y descanso.

1. **Vivienda y alojamiento: Apoyo en relación con la vivienda y arreglos de alojamiento en la comunidad, incluidas las modificaciones del hogar (por ejemplo, información y asistencia en materia de vivienda, apoyo en el hogar servicios de vivienda con apoyo, apoyo financiero para la vivienda entre otros).**

El artículo 16 de la LGIPD precisa que “Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras”.

# En este sentido, la Ley de Vivienda, en su artículo 3 establece que “Las disposiciones de esta Ley deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda”.

En el mismo orden de ideas, existe el Programa Nacional de Vivienda 2021-2024que tiene como objetivo prioritario “Homologar diferentes sistemas de información y tecnología existentes para ajustar los lineamientos del sector de la vivienda a las características que debe cumplir una vivienda adecuada, así como a las necesidades prioritarias de poblaciones indígenas, jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes. Además, con la intención de promover la asequibilidad de la vivienda, se plantea “Focalizar la política de subsidios hacia sectores de menores ingresos, en condiciones de rezago o grupos históricamente discriminados (mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes)”.

Por otra parte, el 23 de marzo del 2022 se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar la fracción IX del artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el objetivo de agregar que el Consejo de Administración del Instituto tendrá la facultad de proponer a la Asamblea General, que las políticas, planes y estrategias en materia de vivienda deberán ser diseñadas y operadas con el propósito de que las personas con discapacidad accedan a créditos para la vivienda en igualdad de condiciones, en un marco de protección de sus derechos humanos.

Asimismo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores opera el programa "Hogar a tu medida" cuya función es brindar a las personas derechohabientes con discapacidad y sus familiares, facilidades para la realización de adaptaciones para la vivienda que adquieran a través de su crédito en esa institución.

1. **Apoyo a la familia y al hogar: Apoyo a las familias y a los hogares con miembros con discapacidad (por ejemplo, apoyo informal a las personas con discapacidad, incluida la licencia laboral relacionado con el cuidado y apoyo, y el desarrollo de capacidades para el cuidado y el apoyo informal, programa de redes comunitarias y de movilización de la comunidad, grupos de apoyo entre pares, programas de intervención localizados, círculos de apoyo, apoyo a la primera infancia, servicios de cuidados temporales, entre otros).**

De acuerdo con el Boletín No. 5363 de la Cámara de Diputados, ésta aprobó en lo general y en lo particular el 18 de noviembre de 2020, el dictamen que reforma y adiciona los artículos 4º y 73 de la Constitución Política, en materia de Sistema Nacional de Cuidados.

El dictamen, enviado al Senado para sus efectos constitucionales, resalta que para garantizar el derecho al cuidado digno se implementará el Sistema Nacional de Cuidados, que incluye sus dimensiones económica, social, política, cultural y biopsicosocial, así como políticas y servicios públicos con base en diseño universal, ajustes razonables, accesibilidad, pertinencia, suficiencia y calidad. Tendrán prioridad en dicho Sistema las personas que requieran cuidados por enfermedad, discapacidad, niñas, niños, adolescentes y personas mayores, quienes vivan en condiciones de extrema pobreza, y las personas que realicen actividades de cuidados sin remuneración alguna.

Por lo que si bien, el Sistema Nacional de Cuidados, se encuentra aún en proceso legislativo, también lo es, que el Estado Mexicano, sigue trabajando para elevar a rango constitucional el derecho al cuidado digno y creando políticas públicas dirigidas a implementar servicios de cuidados de la población más vulnerable.

En este sentido, el Programa Sectorial de Bienestar enfocado en dar cumplimiento al Eje II. Política Social, Construir un país con bienestar del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024; establece en su numeral “6.- Objetivos prioritarios” que, acorde con lo plasmado en el PND, el objetivo más importante del Gobierno es que la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar ya consolidado, por lo cual todas las políticas y acciones de gobierno estarán encaminadas a lograrlo.

Asimismo, señala en su numeral “6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan” que, la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad se puede atenuar a partir de la intervención pública para atender a este grupo poblacional. Subrayando en su apartado “Derecho al cuidado: Un derecho social en construcción” que todas las personas a lo largo de su curso de vida pueden necesitar de apoyos para su desarrollo por lo que las obligaciones del Estado, desde una perspectiva antidiscriminatoria, es procurar el desarrollo integral y el bienestar social para todas las personas, debiendo ofrecer una respuesta de política pública para quienes están en situación de dependencia y quienes requieren la asistencia de otras personas para realizar sus actividades cotidianas, así como también las necesidades y derechos de las personas que prestan tales cuidados.

En virtud de lo cual, dispone en su apartado “7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales”, como acciones puntuales, para “Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan”, las siguientes:

* Implementar servicios de cuidados para niñas y niños, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
* Contribuir a la coordinación e implementación de un Sistema Nacional de Cuidados a partir de los servicios de cuidados del sector.
* Asegurar el servicio de cuidados para niñas y niños de la primera infancia con y sin discapacidad, con enfoque de derechos humanos y diferenciado, de las madres, padres solos o tutores que están en busca de un empleo, estudian o trabajan.

Por otro lado, la Secretaría de Bienestar, para atender de manera integral el bienestar de la población cuenta, entre otros, con los siguientes Programas:

* Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; el cual de acuerdo a sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2021 busca contribuir a mejorar el ingreso monetario de los hogares de las personas mexicanas con discapacidad permanente de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años de edad y personas de 30 y hasta un día antes de cumplir los 65 años de edad, que habiten en municipios y localidades indígenas o afromexicanas o en municipios o localidades con alto o muy alto grado de marginación. Se otorgan apoyos económicos a la población objetivo del programa a través de una transferencia monetaria de manera bimestral y directa. Las personas beneficiarias de 0 a 17 años de edad pueden, adicionalmente, acceder a servicios de rehabilitación como apoyo en especie otorgado por las Instituciones de Salud con las que la Instancia Ejecutora firme convenio.
* Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, cuyo objetivo general de acuerdo a sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 2021, es el de contribuir a mejorar las condiciones que permitan el acceso al ejercicio pleno de los derechos sociales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad por la ausencia de uno o de ambos padres.

Este Programa forma parte de las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad y, como parte del reconocimiento de derechos y del interés superior de la niñez en el país, se pone particular atención en las niñas y niños con discapacidad, en este caso, específicamente a niñas y niños de 0 hasta los 6 años con discapacidad, quienes tienen requerimientos de cuidado específicos y a los cuales es sumamente necesario brindarles condiciones para un desarrollo con inclusión.

El Programa consiste en la entrega de un apoyo económico bimestral a la madre, padre o tutor para destinarlos al cuidado y atenciones de la niña o niño durante la primera infancia y atender las necesidades específicas. El monto del apoyo económico para las niñas y niños con discapacidad es de $3,600.00 pesos mexicanos, por cada niña o niño, a diferencia de los $1,600.00 pesos mexicanos que se les da a las niñas y niños de 0 a 4 años sin discapacidad.

Esto último responde a que la situación de las niñas y niños con discapacidad ante la ausencia del padre, la madre o ambos, tiene un alto grado de complejidad por su exposición a diversos factores de riesgo que pueden afectar significativamente su supervivencia y desarrollo, aunado a la pobreza y la vulnerabilidad por carencias sociales que condicionan su acceso al cuidado, considerando que sus necesidades de cuidado pueden ser diversas y en muchos casos especializadas, vinculadas con tratamientos médicos y terapéuticos.

Existen otras estrategias y programas de apoyo a las personas con discapacidad y sus familias. Tal es el caso del SNDIF cuenta con un programa de credencialización a nivel nacional para las personas con discapacidad; este documento, el cual pueden solicitar todas las personas con discapacidad en el país, tiene un reconociendo nacional y permite acceder a descuentos en distintos bienes y servicios.

A nivel estatal, se destacan los siguientes programas:

* Desde el 2018 el gobierno del Estado de México implementa el programa “Familias fuertes creciendo contigo” para contribuir “al gasto de los hogares que se encuentran en situación de pobreza multidimensional en su dimensión alimentaria o vulnerabilidad, en los que algún integrante de la familia sea menor; presenten alguna discapacidad; se encuentren en tratamiento o de salud especializado; se encuentren bajo el cuidado de algún familiar por situación de orfandad; debido a la ausencia de la madre por resolución judicial; o vivan en hogares monoparentales masculinos” .
* El gobierno del estado de Nuevo León tiene una estrategia con la cual se busca impulsar el desarrollo integral de las niñas y niños con edad de 43 días de nacidos y hasta los 6 años, para acceder a la oferta de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral en estancias infantiles; el apoyo es monetario y se otorga por cada niña o niño con alguna discapacidad, inscrito en alguna estancia infantil afiliada.
* De forma semejante, la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, ha diseñado un programa social para cuidadores y cuidadoras para apoyar a cientos de familias con integrante enfermos o con alguna discapacidad en las colonias más vulnerables, único en su tipo. Dicho programa el año pasado benefició a 700 personas entre 50 y 70 años que se dedican al cuidado de sus familiares. Este programa reconoce y apoya el trabajo de personas que cuidan de otras con apoyos monetarios bimestrales.
* El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México está implementando un programa de empleo temporal dirigido a las personas con discapacidad para que puedan acceder a empleos temporales en períodos de tres meses (dependiendo de las aptitudes y habilidades de las personas) en áreas operativas o administrativas del Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo, ent de que las familias de las personas con discapacidad cuenten con una fuente de ingresos extra en el período de la pandemia por COVID-19.
* Igualmente, el gobierno de la Ciudad de México brinda a las personas con discapacidad la opción de tramitar su “Tarjeta de gratuidad” con la cual podrán acceder a diferentes beneficios como: acceso gratuito al sistema integrado de transporte colectivo, solicitar cortesías urbanas en línea, obtener descuentos en pagos y servicios, realizar trámites gubernamentales ante instituciones públicas de la Ciudad de México e ingresar a las plataformas virtuales de forma rápida, segura y gratuita.
* Por otra parte, varios gobiernos estatales implementan programas de credencialización para las personas con discapacidad para que accedan a beneficios en bienes y servicios, como por ejemplo, el Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas con Discapacidad cuenta con un programa que traslada a personas con discapacidad desde su domicilio al lugar donde toman su terapia de rehabilitación con la finalidad de fomentar la autonomía, facilitar el traslado y garantizar la continuidad en el tratamiento. Asimismo, esta entidad federativa cuenta con el programa de “Bolsa de trabajo para personas con discapacidad” con el objetivo de “facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad mediante acciones coordinadas con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado”.

1. **Costos adicionales relacionados con la discapacidad: Apoyo financiero para pagar bienes y servicios, incluyendo presupuestos personalizados y pagos directos (por ejemplo, transferencias directas más allá de la sustitución de ingresos, fondos adicionales para cubrir servicios de apoyo, entre otros)**

El gobierno de Nuevo León cuenta con el “Programa de inclusión para las personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad” que tiene como población objetivo a las personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad que no tengan ingreso por concepto de pensión o jubilación y que residan en el Estado de Nuevo León. El programa contempla dos tipos de apoyo para personas con discapacidad:

1. Actividades de inclusión social: Promueven la participación de las personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad, en programas, acciones y actividades que impulsan su inclusión en los ámbitos cultural, educativo, laboral y financiero. En coordinación con otras dependencias e instituciones de gobierno federal, estatal y municipal; así como educativas, organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada.
2. Apoyo económico: consiste en un apoyo monetario.

Por otra parte, el Gobierno de Coahuila implementa el Programa estatal para la inclusión de las personas con discapacidad con el objetivo de “Fomentar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad con la reorientación de programas que faciliten su inclusión al ámbito familiar, laboral, social y al desarrollo de una vida plena”. El programa contempla cuatro acciones estratégicas:

* Apoyo económico: Brindar apoyo económico por ocho meses a personas con discapacidad que requieren de cubrir necesidades tales como: alimentación educación, salud, higiene personal, transporte, entre otras;
* Coahuila Incluyente: Brindar pláticas, talleres, conferencias a personas con y sin discapacidad al igual que a sus familias, estudiantes, servidores públicos con el fin de que la sociedad reconozca las capacidades de la persona y dejen a un lado su discapacidad fomentando con esto su inclusión a la sociedad;
* Credencial Nacional para Personas con Discapacidad
* Programa Sobre Ruedas nos Movemos Juntos: Otorgar sillas de ruedas a personas con discapacidad y adultos mayores a fin de mejorar su estado físico y emocional a través de brindarle las herramientas para su autonomía, mejoran sus condiciones de vida y logren un proceso de inclusión exitoso.

# El gobierno del Estado de Jalisco cuenta con un programa de becas para que los jóvenes puedan continuar sus estudios en el extranjero. El grupo de atención lo conforman: trabajadores, amas de casa, estudiantes, académicos, población en general y personas con discapacidad, etc.

El gobierno del Estado de Morelos cuenta con un programa para personas con discapacidad “Rehabilitación Basada en la Comunidad” que tiene como estrategia brindar servicios de rehabilitación para las personas con discapacidad, pero al mismo tiempo involucrar al entorno cerca del beneficiario de la mano de las organizaciones civiles con el propósito de reunir esfuerzos, el programa tiene dos ejes:

* Orientar, supervisar y facilitar el acceso a los servicios de prevención.
* Rehabilitación e inclusión social de las personas con discapacidad y de sus familias, con el esfuerzo conjunto de las organizaciones de la sociedad civil y los pertinentes servicios gubernamentales de salud, educación y trabajo social, entre otros.

El gobierno del Estado de Hidalgo implementa el programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria, que está dirigido a “personas con discapacidad permanente, sujetos de asistencia social alimentaria, que presentan riesgo alimentario, que habitan en municipios, localidades o AGEB rurales, urbanas o indígenas de alto y muy alto grado de marginación”. Cuenta con la siguiente característica: Servicio de comedor localizados en los Sistemas Municipales DIF (SMDIF) del estado.

El gobierno del Estado de Michoacán tiene un programa dirigido a las personas con discapacidad y adultos mayores que consiste en gestionar la entrega de aparatos y tecnologías como aparatos auditivos, bastones, sillas de ruedas, entre otros.

El gobierno del Estado de Quintana Roo cuenta con un programa que se denomina “Salud y atención a personas con discapacidad”. El objetivo del programa es Proporcionar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en el Estado, así como prevenir la estructuración de procesos invalidantes a través de la detección oportuna y adecuada de factores de riesgo que afectan a la población.

Asimismo, el gobierno del Estado de Veracruz está implementando un programa para padres de familia de personas con discapacidad: Escuela para Familias con Hijos(as) y Familiares de Personas con Discapacidad; este programa busca concientizar a la población en general, a través de talleres, platicas y actividades con familiares para generar un ambiente de convivencia, al mismo tiempo que se promueve el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

# 1(b). ¿Cuáles son las instituciones gubernamentales, los departamentos y los ministerios encargados de presupuestar, financiar y aplicar lo anterior?

* Secretaría de Hacienda y Crédito Público
* Secreta ría de Educación Pública (entidad encargada de CONOCER).
* Gobierno de la Ciudad de México.
* Secretaría de Bienestar.
* Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
* Institutos y comisiones estatales para la atención a personas con discapacidad
* Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia
* Gobiernos de los estados a través de su Secretaría de Desarrollo Social o de Bienestar.

# 1(c). ¿Cómo participa la economía social y solidaria (tercer sector, sector sin fines de lucro), especialmente el sector de la discapacidad, en la presupuestación, financiación y aplicación de lo anterior (1(a))?

De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Economía Social y Solidaria, el Sector Social de la Economía estará integrado por las siguientes formas de organización social:

1. Ejidos;
2. Comunidades;
3. Organizaciones de trabajadores;
4. Sociedades Cooperativas;
5. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y
6. En general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La LGIPD en el artículo 37, fracción V menciona que el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene como objetivo “Promover entre los Poderes de la Unión y la sociedad civil acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población con discapacidad”; asimismo, en su artículo 56 menciona que la Asamblea Consultiva, que es el órgano de consulta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, podrá recibir colaboración de las organizaciones civiles para la planeación e instrumentación de los programas y acciones.

La Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX) surgió en 2009 por la unión de cinco organizaciones de la sociedad civil que buscaban dar seguimiento a la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México y, en su caso, realizan acciones para auxiliar en la implementación de los programas federales, así como cursos sobre derechos humanos y sensibilización.

Igualmente, la fundación “Todos en Cree-Cimiento IAP” desde hace siete años formó y desarrolló la red de padres de niños con discapacidades múltiples y severas; la red de padres de familia ofrece psicoterapias de grupo, psicoterapias individuales, psicoterapias familiares, conferencias y talleres abiertos a todo el público.

De igual manera, la Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados (Fhadi I.A.P) ayuda a personas que por diversos motivos han perdido su movilidad y necesitan integrarse o reintegrarse a la vida laboral, proporcionan rehabilitación terapéutica profesional que les permita tomar conciencia de sus procesos emocionales, cuentan con distintos programas, que abarcan rehabilitación psicológica y atención médica, terapia familiar, capacitación para reintegración laboral; en este sentido, la fundación cuenta con un programa de manejo de silla de ruedas que es brindado por un grupo de instructores (enseñanza de pares) todos usuarios de silla de ruedas, especialistas en la Rehabilitación Activa. También implementa el taller de competencias digitales, en donde imparten clases para que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para trabajar con una computadora o tableta de forma autónoma e independiente, realizando tareas que favorezcan su desarrollo económico y laboral.

Otra organización civil dedicada a apoyar a las personas con discapacidad es “Audio amigo I.A.P” que brinda servicios a personas de escasos recursos económicos con discapacidad auditiva, problemas de lenguaje, aprendizaje, emocionales y de conducta a través de actividades de prevención, atención terapéutica, rehabilitación integral y estimulación. Todo esto con el objetivo de contribuir con el desarrollo de sus capacidades que les permitan su inclusión escolar, laboral, social. Dicha organización, brinda talleres y terapias para al público en general de manera gratuita; su programa de mayor impacto social es el que brinda aparatos auditivos a quien lo necesite y, al ser una fundación sin fines de lucro, las cuotas de recuperación son destinadas al servicio asistencial que realizan, por otro lado el aparato auditivo puede ser entregado por donación a través de una entrevista de trabajo social en donde se determina junto con el patronato de la institución si la persona es candidata al apoyo.

En este mismo sentido, la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE) que es una asociación civil sin fines de lucro que afilia a 114 organizaciones del país con quienes trabaja por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, sensibilizando a la sociedad y participando en políticas públicas conjuntamente con otras organizaciones de y para personas con discapacidad intelectual, brinda servicios y talleres especializados para niños de 0 a 5 años, de 6 a 15 y de 15 a 35 de todo tipo, desde la intervención temprana, estimulación temporal hasta la capacitación laboral para la inclusión de las personas con discapacidad en sociedad. Al ser una confederación que aglutina a distintas organizaciones civiles orientadas al trabajo y asistencia para ayudar a las personas con discapacidad, cualquier asociación puede unirse a dicho organismo, pagando una cuota anual para el financiamiento de sus programas y acciones.

La organización “Vida Independiente México” cuenta con un programa de vida independiente para las personas usuarias de sillas de ruedas; dicho programa busca alianzas con instituciones públicas y privadas con el objetivo de rehabilitar en los próximos años a por lo menos 500 mil personas con discapacidad, por medio de la formación de instructores mediante actividades de capacitación, prácticas profesionales en dicha institución con la finalidad de ayudar a las personas a desplazarse libremente y, de esta manera, fomentar la vida independiente. Actualmente, la metodología de pares es la columna vertebral de todo el modelo y es la que, según dicha asociación, les permitirá alcanzar sus metas. Esta organización se financia por medio de donativos.

# 1(d). ¿Cómo participan las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en el diseño y el seguimiento de lo anterior?

La LGIPD en el artículo 37, fracción V, menciona que el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene como objetivo “Promover entre los Poderes de la Unión y la sociedad civil acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población con discapacidad”; asimismo, en el artículo 56 de la citada ley , menciona que la Asamblea Consultiva, que es el órgano de consulta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, podrá recibir colaboración de las organizaciones civiles para la planeación e instrumentación de los programas y acciones.

Asimismo, el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), que es el órgano responsable de instrumentar las políticas públicas y programas de fomento e impulso al sector social de la economía, ha implementado y coordinado los Nodos para el impulso de la Economía Social y Solidaria (NODESS) que son las alianzas estratégicas conformadas por el gobierno-organizaciones de la sociedad civil y el sector privado con el objetivo de propiciar el desarrollo económico, ambiental y social de las personas.

Para cumplir con sus objetivos y metas, todas las acciones y estrategias que las NODESS realizan pretenden ser bajo los parámetros de transversalidad, con lo cual reconoce que su trabajo se relaciona con otros asuntos públicos relevantes, teniendo como marco referencial 4 ejes transversales, de los que destaca el de Género e inclusión: los NODESS deberán trabajar, desarrollar y apoyar proyectos, bajo políticas de respeto y equidad de género, así como promover la inclusión de personas con discapacidad y/o vulnerables.

Los mecanismos de participación se constituyen después de un proceso complejo que establece el INAES. Los ciudadanos organizados pueden presentar proyectos para su diseño, evaluación y, en caso de cumplir con los parámetros de financiación. Por ejemplo, en diciembre pasado se realizó el proyecto “Acelera” con seis empresas de economía social, sobresaliendo el proyecto “Pavo Down” empresa solidaria que tiene como misión incentivar la crianza, transformación y producción de la carne de pavo, y que tiene como factor diferencial la contratación de personas con Síndrome de Down, sirviendo para emplear a personas con discapacidad a la vez que contribuye al desarrollo económico de forma inclusiva[[1]](#footnote-1).

Por otro lado, en el Programa de Fomento a la Economía Social 2021-2024 se propone contribuir a los objetivos de bienestar de la política social contenida en el Plan Nacional de Desarrollo y que se desplegará a través de nueve programas prioritarios, entre los cuales se encuentra el programa de Bienestar de las Personas con Discapacidad que busca: impulsar acciones de ahorro y consumo que contribuyan a optimizar el aprovechamiento de los ingresos de sus beneficiarios, así como a estrategias de inclusión productiva.

Por lo general, las instancias gubernamentales responsables del diseño y formulación de políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad crean espacios para la discusión con organizaciones de la sociedad civil y representantes de colectivos con la intención de escuchar sus opiniones e inquietudes, de esta manera se impulsa la participación de este sector de la sociedad. Actualmente, el Congreso de la Ciudad de México emitió una convocatoria para participar en el parlamento de las personas con discapacidad.

También existen casos como el del Estado de Jalisco, que tiene un programa por la Inclusión de Personas con Discapacidad Jalisco y en el cual incentiva la participación de OSC que desarrollan proyectos destinados al desarrollo e inclusión de personas con discapacidad en el estado de Jalisco, con enfoque de derechos humanos, inclusión y no discriminación. El proceso consta de tres etapas, en el cual las organizaciones de la sociedad civil, en coordinación con las personas con discapacidad construyen un proyecto con un objetivo específico, se hace una evaluación del mismo y a los mejores se les entrega una cantidad de dinero para desarrollar sus planes.

Por otra parte, para el monitoreo y vigilancia del cumplimiento de los objetivos y metas del *Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras,* tales como la entrega directa de los apoyos a la población beneficiaria, así como la correcta aplicación de los recursos públicos asignados. Éste cuenta con la Contraloría Social, la cual implica actividades de monitoreo y vigilancia realizadas por las personas beneficiarias del programa. Con la contraloría se promueve la participación de la ciudadanía, entre ellas personas con discapacidad, y se reconoce y fomenta la participación de las comunidades indígenas y afromexicanas. Dicho mecanismo está descrito en el numeral 15. Contraloría Social de las Reglas de Operación del Programa; así como en la Guía Operativa, el Esquema de Contraloría Social y su Plan Anual de Trabajo que pueden ser consultados en la siguiente dirección electrónica: <https://www.gob.mx/bienestar/documentos/contraloria-social-2022?idiom=es>.

# 2(a). ¿Dispone su país de legislación o políticas, a cualquier nivel de gobierno, que regulen y coordinen un sistema de cuidados y apoyos que tenga en cuenta las áreas mencionadas en 1(a)? Por favor, facilite las referencias a la documentación.

En la actual LXV legislatura existe una iniciativa de ley para crear el Sistema Nacional de Cuidados que tiene como objetivos prioritarios eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres, y, garantizar, como se específica en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que menciona que toda persona tiene derecho al cuidado digno que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad.

En la iniciativa de ley se prevé que el Estado sea el que garantice el acceso a los servicios de cuidado y se planea que el Sistema Nacional de Cuidados esté conformado por bienes y servicios que ofrecen tanto el sector público como el privado, con lo cual se estaría construyendo un modelo mixto de atención y de servicios con la finalidad de lograr una redistribución del trabajo de cuidados entre el gobierno, las empresas y las familias.

Asimismo, y con la finalidad de aprovechar la red de instituciones y servicios que se encargan de administrar servicios de cuidados como guarderías, hospitales, comedores, etc., se tiene proyectado que en el diseño del Sistema no se genere más burocracia gubernamental, sino más bien el Sistema tendría como elemento principal la articulación entre las dependencias gubernamentales que tienen una orientación hacia los servicios de cuidado como el sector salud, educativo, etc. para que los costos del Sistema sean menores y más eficientes. El Sistema busca aglutinar un conjunto de acciones, programas y políticas públicas, teniendo en su centro y como eje a las personas, garantizando sus derechos y fomentando su autonomía.

A nivel estatal, en el Congreso de la Ciudad de México también está en discusión la creación de un Sistema de Cuidados para los habitantes de la capital. Cabe destacar como un dato importante que, en el país, la Constitución política de la Ciudad de México fue la primera en reconocer el derecho al cuidado.

La iniciativa para establecer un Sistema de Cuidados en la Ciudad de México está motivada por los mismos principios sociales y fundamentos programáticos que su homóloga a nivel federal, teniendo como elemento diferencial la gratuidad de la totalidad de los servicios en materia de cuidados, y sin modificar los tres principales actores involucrados en el diseño e implementación del Sistema (Estado-empresas- familia).

# ¿Dispone su país de una estrategia para desarrollar legislación, políticas y programas que permitan el desarrollo de los sistemas de apoyo descritos en el apartado 1(a) anterior que incluya objetivos, indicadores y un mecanismo de rendición de cuentas? Por favor, facilite las referencias a la documentación.

En México la estrategia para desarrollar legislación, políticas y programas que permitan el desarrollo de los sistemas de apoyo como el descrito en el numeral 1(a) proviene del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,[[2]](#footnote-2) particularmente de su Eje "Política Social", objetivo “Construir un país con Bienestar”, que tiene como finalidad favorecer el acceso a los niveles de bienestar y revertir la situación de desigualdad social en México, así como del Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024,[[3]](#footnote-3) específicamente en los siguientes objetivos prioritarios y estrategias:

* Objetivo 1. Contribuir a garantizar el conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan.
  + Estrategia 1. Contribuir al acceso de servicios de cuidados para niñas y niños, personas con discapacidad y adultas mayores para mejorar su bienestar.
* Objetivo 2. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios.
  + Estrategia 1. Priorizar en la atención de los programas sociales a las personas que habiten en municipios y alcaldías marginados para disminuir sus niveles de marginación.
* Objetivo 4. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales históricamente excluidos.
  + Estrategia 1. Promover políticas acordes a las distintas etapas del ciclo de vida para incrementar el bienestar de la población más vulnerable.
  + Estrategia 2.Ampliar los apoyos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de desventaja para mejorar su bienestar.

Cabe señalar que el objetivo prioritario 1 refleja el enfoque de cuidados dentro de la política social del Gobierno de México, al asumirlo como un derecho a partir del cual se pretende lograr la universalización del bienestar para toda la población. Si bien se señala que es un derecho en construcción, se perfila como un mecanismo para reducir la desigualdad social y de género que resulta de la falta de acceso al cuidado.

En ese sentido, entendiendo la perspectiva sobre el papel del Estado mexicano en materia de cuidado, la cual es que “el Estado debe ofrecer una respuesta de política pública para quienes están en situación de dependencia y quienes requieren la asistencia de otras personas para realizar sus actividades cotidianas, así como también las necesidades y derechos de las personas que prestan tales cuidados (...)”[[4]](#footnote-4), se realizaron los cambios sustanciales antes mencionados al Programa.

Por su parte, el Poder Legislativo es uno de los poderes de la Unión del Estado mexicano, está integrado por las Cámaras de diputados y de senadores que han sido electos y ostentan una representación popular; su función esencial, contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), es la de emitir las normas con rango de ley a nivel federal, que se inician y emiten en todas las materias, conforme lo establecen los artículos 71 y 73 de la CPEUM.

A nivel subnacional, los congresos locales tienen facultad para legislar o expedir leyes o decretos en su ámbito territorial, tienen en términos generales la facultad de legislar en todos los ramos del régimen interior de las entidades federativas, que la CPEUM no reserva para el Congreso de la Unión. Parte del trabajo legislativo consiste en formular iniciativas que procuren el bienestar de las personas, de esta manera los distintos grupos parlamentarios proponen iniciativas que, de aprobarse, serían fundamentales para la implementación de políticas públicas, como parte de una estrategia legislativa.

Del mismo modo, el artículo 26 de la CPEUM indica que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Como producto de este mandato, se consolida el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como una herramienta programática que establece y orienta el trabajo de la administración pública durante un período de tiempo de 6 años.

En el PND se encuentran las directrices políticas, derivadas de un diagnóstico de la situación social y política del país, que marcarán las pautas, objetivos y metas del gobierno, siendo un elemento esencial para la planeación de políticas públicas, programas y acciones a nivel federal (cabe resaltar que cada entidad federativa cuenta con un plan de desarrollo) para impulsar el desarrollo social y económico del país. En el PND del actual gobierno, uno de los principios claves es lograr un crecimiento económico incluyente, es decir, priorizando acciones y políticas que favorezcan a la población de menor ingreso, a través de programas sociales que contribuyan a esta meta.

Respecto del mecanismo de rendición de cuentas, el artículo 79 de la CPEUM establece que la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley en su función de fiscalización, la cual será ejercida conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala en el párrafo tercero del artículo 1º que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales.

A nivel programático federal existe el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, cuyo Decreto de aprobación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2019, alineado al Plan Nacional de Desarrollo del mismo periodo. Respecto al primero, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, y la Oficina de la Presidencia de la República, a través de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, darán seguimiento en sus respectivos ámbitos de competencia, a la implementación de las estrategias prioritarias y las acciones puntuales, así como al cumplimiento de sus objetivos prioritarios.

Dicho Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 prevé la existencia de un Sistema de Evaluación del Desempeño que se enfoca en realizar valoraciones objetivas de los programas presupuestarios bajo el principio de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, basándose en indicadores estratégicos y de gestión. Uno de los pilares de dicho Sistema es el seguimiento, que consiste en la verificación del desempeño del nivel de cumplimiento de los objetivos y metas de los programas, por medio de indicadores estructurados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y las Fichas de Indicador del Desempeño (FID). La información generada en la MIR se utiliza para proporcionar al Congreso de la Unión elementos que permitan medir el desempeño de los programas, en relación con el alcance de sus metas y objetivos, lo cual constituye un uso eficiente de la información, ya que proporciona herramientas confiables para la toma de decisiones en materia de política pública. Otro pilar del Sistema se refiere al análisis sistemático y objetivo de los programas federales para determinar su congruencia y analizar el logro de sus objetivos y metas, para identificar su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.

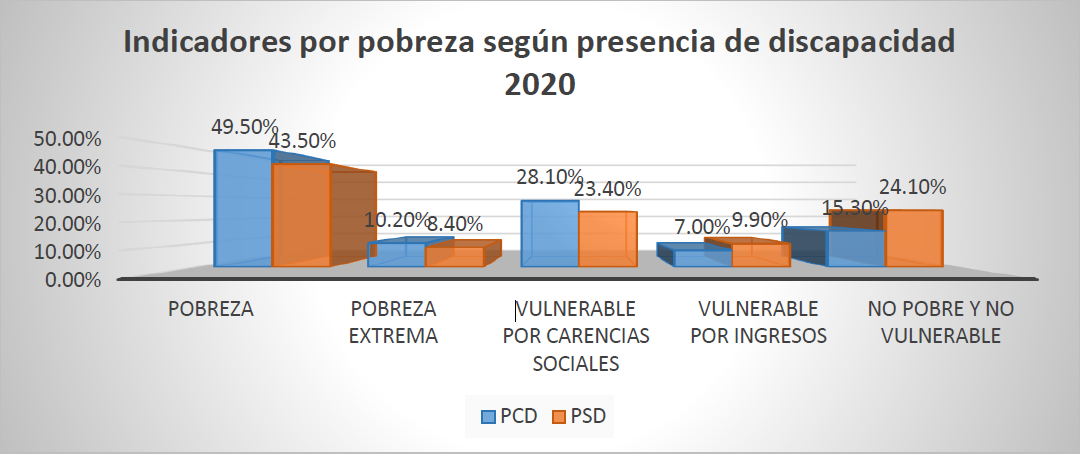
Con lo anterior, se cumplen los requisitos de que programas como los que han sido descritos tengan objetivos, indicadores y un mecanismo de rendición de cuentas.

# Por favor, provea datos estadísticos sobre las personas con discapacidad y las familias y hogares que acceden a los sistemas de cuidados y apoyos descritos en 1(a) y 2(a).

* De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del total de población en el país (126,014,024), 5.7% (7,168,178) tiene discapacidad y/o algún problema o condición mental[[5]](#footnote-5).

# Estructura de la población por condición de discapacidad y/o problema o condición mental

En 2020, las personas con discapacidad y/o algún problema o condición mental, tienen la siguiente distribución: 899 mil (13%) son niñas y niños, 869 mil (12%) personas jóvenes, 2.2 millones (31%) personas adultas y 3.2 millones (45%) personas adultas mayores[[6]](#footnote-6). A continuación, se muestra la comparativa entre las personas con discapacidad (PCD) con las personas sin discapacidad (PSD) referente al nivel de pobreza:



Elaboración propia con datos obtenidos de ENIGH y del INEGI, 2020.

En la siguiente tabla, se muestra el total de personas perceptoras de ingreso y su ingreso promedio trimestral monetario por tipo de discapacidad:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de discapacidad | Personas perceptores de ingreso | Ingreso promedio (pesos ) |
| Total | **81 606 007** | 19 023 |
| No tiene discapacidad | 75 107 664 | 19 487 |
| Con discapacidad | 6 498 343 | 13 659 |
| Caminar, subir o bajar usando sus piernas | 3 535 627 | 14 296 |
| Ver (aunque use lentes) | 2 270 986 | 12 945 |
| Mover o usar brazos o manos | 1 159 470 | 12 422 |
| Escuchar (aunque use aparato auditivo) | 1 254 587 | 12 290 |
| Bañarse, vestirse o comer | 939 313 | 11 403 |
| Realizar sus actividades diarias (alguna limitación emocional o mental) | 764 550 | 9 997 |
| Aprender, recordar o concentrarse | 1 062 504 | 9 770 |
| Hablar o comunicarse | 554 497 | 9 499 |
| Discapacidad no especificada | 74 626 | 9 422 |

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020 ENIGH 2020

El Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente se puso en marcha en el 2019, y en mayo de 2020 se modificó el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se elevó a rango constitucional el derecho a la entrega de un apoyo económico a las personas que tuvieran discapacidad permanente, obteniendo los siguientes datos:

* Entre enero y marzo de 2021, 923,167 personas recibieron sus pensiones, de las cuales el 43 % eran mujeres (398,262) y el 57 %, hombres (524,905). Además, de esas personas, el 15% residía en municipios o localidades indígenas o afroamericanos, mientras que el 85 % vivía fuera de esas comunidades[[7]](#footnote-7).

Respecto a los apoyos que recibe la población con discapacidad, con los datos captados con el Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020 a través de la pregunta *Ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo (IMFDT)*, se puede:

* Cuantificar los hogares censales que son beneficiados con dinero proveniente de envíos de personas que residen en otros países.
* Cuantificar los hogares censales que reciben dinero de personas de su familia, parientes o amigos que viven en otra vivienda dentro del territorio nacional.
* Conocer el número de hogares censales beneficiados por algún programa social de cualquier orden gobierno.
* Conocer el número de hogares censales donde alguno(a) de sus integrantes recibe dinero por jubilación o pensión (resultado de las prestaciones laborales o por pensión alimenticia, de viudez o de orfandad).

Al analizar esta información con la pregunta sobre discapacidad, se puede obtener el número de hogares censales donde al menos uno de sus integrantes tiene discapacidad, y reciben ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo. Como resultado se obtuvo que el 73.44 % de los hogares con al menos un integrante con discapacidad recibe ingreso por programas de gobierno.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hogares censales según condición de percepción de IMFDT1** | **Fuente de IMFDT** | **Nacional** | | **Hogar con al menos un integrante con discapacidad** | |
| **Absolutos** | **%** | **Absolutos** | **%** |
| **Hogares censales** | **Total** | **34 987 915** | **100** | **5 129 601** | **100** |
| Hogares censales con percepción de ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo1 | **Total2** | **13 482 766** | **38.54** | **3 126 826** | **60.96** |
| Programas de gobierno3 | 8 754 430 | 64.93 | 2 296 235 | 73.44 |
| Jubilación o pensión | 4 564 647 | 33.86 | 1 157 707 | 37.02 |
| De alguna persona que vive en otra vivienda dentro del país | 2 136 664 | 15.85 | 461 994 | 14.78 |
| De alguna persona que vive en otro país | 1 768 651 | 13.12 | 417 850 | 13.36 |
| **Sin percepción monetaria** | **Total** | **21 407 361** | **61.19** | **1 996 618** | **38.92** |
| **No especificado** | **Total** | **97 788** | **0.28** | **6 157** | **0.12** |

Fuente: elaboración con base en los Microdatos Muestra (Cuestionario Ampliado). Disponibles en: <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos>

[1] La distribución porcentual de la condición de percepción de ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo se calcula con respecto al total de hogares censales.

[2] El porcentaje para cada tipo de fuente se obtuvo con respecto al total de hogares censales que perciben ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo. La suma de los porcentajes puede ser mayor a 100 %, debido a que en los hogares censales pueden recibir ingresos de más de una fuente.

[3] Considera las fuentes de ingresos monetarios que perciben los integrantes de los hogares censales de programas sociales del gobierno federal o estatal como: PROSPERA, BIENESTAR, Adultos Mayores, PROCAMPO, PROAGRO, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.

Sin embargo, vale la pena aclarar que estas preguntas no distinguen los programas de gobierno específicamente dirigidos a personas con discapacidad. La información del Cuestionario Ampliado puede ser consultada en los Microdatos del Censo 2020, <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos>

Adicionalmente, si bien el INEGI cuenta con otras fuentes como encuestas y registros administrativos sociodemográficos, éstas no contienen la información para dar respuesta a esta pregunta, ya que no son competencia del Instituto.

No obstante, el INEGI se encuentra comprometido con la medición de los fenómenos relacionados con las personas con discapacidad; prueba de ello es la instalación del Comité Técnico Especializado en Información sobre Discapacidad en 2011, el cual tiene entre sus objetivos integrar el Sistema de Información sobre Discapacidad y asegurar su vinculación con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Este Comité, durante el primer y segundo semestre de 2019, elaboró una propuesta de “Lineamientos para captar, integrar y presentar información de población con discapacidad en programas del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica”, con el objeto de fortalecer la captación y disponibilidad de estadísticas sobre la población con discapacidad.

Lo anterior, a razón de los cambios en los artículos 22 y 23 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2018. En 2020, el Comité acordó enviar el proyecto de lineamientos antes mencionado a la Presidencia del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, para proseguir con su proceso de aprobación. En julio y agosto del 2021 el proyecto de lineamientos fue sometido a consulta pública y actualmente se encuentra en proceso de actualización con base en las observaciones recibidas.

@

1. <https://www.gob.mx/uploads/attachment/file/724327/TE_RMINOS_REFERENCIA_NODESS_2022-1_may06_2022.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, México, 2019, Disponible en:<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019>. [Consulta: 14 de junio del 2022]. [↑](#footnote-ref-2)
3. Secretaría de Bienestar (SEBIEN), *Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024*, (en línea), México, 2020. Disponible en:<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/575834/Programa_Sectorial_de_Bienestar.pdf>. [Consulta: 14 de junio del 2022]. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Idem.*  [↑](#footnote-ref-4)
5. Datos obtenidos del censo del INEGI 2022. Disponible en:

   <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_PersDiscap21.pdf> [↑](#footnote-ref-5)
6. ídem [↑](#footnote-ref-6)
7. Datos obtenidos en: <https://www.socialprotection-toolbox.org/es/inequality/practice/pension-para-el-bienestar-de-las-personas-con-discapacidad-permanente-de-mexico#:~:text=Entre%20enero%20y%20marzo%20de,viv%C3%ADa%20fuera%20de%20esas%20comunidades>. [↑](#footnote-ref-7)